

# **Del *Plan Colombia* al *Plan Patriota*: Impacto del conflicto armado colombiano en el Ecuador, análisis de una estrategia de seguridad subregional**

Hortense FAIVRE D'ARCIER FLORES

Escoles Militaires de Saint-Cyr Coëtquidan  
Centre de Recherche des Ecoles (CREC)  
horteo.flores@wanadoo.fr

Recibido: 19 enero de 2005.

Aceptado: 8 junio de 2005

## **RESUMEN**

El Plan Patriota, amplia ofensiva militar dirigida contra las FARC y financiada por los Estados Unidos, amenaza con desestabilizar a la subregión andina. Se analizan esencialmente las repercusiones de su aplicación sobre las poblaciones fronterizas del Ecuador, víctimas directas a nivel ecológico y socioeconómico de la lucha contra el narcoterrorismo.

**Palabras clave:** Plan Colombia, FARC, narcotráfico, Estados Unidos, desplazamientos, ecología.

## *From the Colombia Plan to the Patriotic Plan: an Outlook on a Specific Subregional Security Strategy through the Impact of the Colombian Conflict in Ecuador*

## **ABSTRACT**

The Patriot Plan, a broad military offensive directed against the FARC and financed by the United States, threatens to destabilize the Andean subregion. This is an analysis of the repercussions of its application on the border populations of Ecuador, who are the direct victims, on an ecological and socio-economic level, of the struggle against the narcoterrorism.

**Key words:** Colombia Plan, FARC, drug trafficking, The United States, displacements, ecology.

## *Du Plan Colombie au Plan Patriote: l'impact du conflit armé colombien en Equateur, regard sur une stratégie sécuritaire sous-régionale*

## **RESUMÉE**

Le Plan Patriote, vaste offensive militaire dirigée contre les FARC et financée par les Etats-Unis, menace de déstabiliser la sous-région andine. On analysera essentiellement les répercussions de son application sur les populations frontalières de l'Equateur, victimes directes au niveau écologique et socio-économique de la lutte contre le narcoterrorisme.

**Mots clef:** Plan Colombie, FARC, narcotraffic, Etats-Unis, déplacements, écologie.

**SUMARIO:** 1. ¿Una cultura de violencia? 2. ¿Es el Plan Colombia una respuesta adecuada? 3. Riesgo de regionalización del conflicto colombiano: ¿El Ecuador un envite decisivo? 4. Repercusiones del conflicto armado sobre la población fronteriza. 5. A la hora de los resultados.

A partir de 2003, la política de « Defensa y de Seguridad democrática » instaurada por el presidente Álvaro Uribe por medio de la adopción de legislaciones de excepción, se orienta hacia la intensificación de la guerra en Colombia. Reforzada por la aplicación del Plan Patriota —última etapa del Plan Colombia— esta política consiste en una amplia ofensiva militar dirigida contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)<sup>1</sup>. La ayuda norteamericana, calculada por un período de tres años, preveía para el año 2003 un financiamiento de 110 millones de dólares destinados al adiestramiento de las Brigadas Móviles y de las Fuerzas Especiales así como también a la adquisición de aviones de combate AC-47 y de transporte de tropas C-130<sup>2</sup>.

Para el gobierno colombiano el objetivo es el de restablecer el Estado de derecho, el control sobre la totalidad del territorio especialmente en el sur y el este del país, donde las FARC concentran sus fuerzas y ocupan el territorio desde hace más de 40 años; para los Estados Unidos es el de acabar con esos grupos armados de influencia marxista que representan una amenaza para sus intereses económicos y comerciales.

## 1. ¿UNA CULTURA DE VIOLENCIA?

Colombia es una de las democracias más antiguas de América Latina, pero paradójicamente posee actualmente el triste récord de primer productor mundial de cocaína, con más del 75% de la producción y está acusada por la ONU y Amnistía Internacional por las frecuentes violaciones de los Derechos Humanos. Es además el cuarto país en el mundo en cuanto al número de desplazados<sup>3</sup>, y cuenta con cerca de 3.000 secuestros por año en promedio y con una tasa de homicidios cercana a 70 por cada cien mil habitantes<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Para ciertos analistas la primera fase de este Plan dirigido contra la guerrilla fue la operación Cundinamarca, iniciada en junio de 2003 bajo el nombre de *Libertad 1*. El general que comandó la Quinta División fue nombrado más tarde comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, unidad encargada de incursionar en los territorios rebeldes de la frontera sur de Colombia. La segunda etapa comenzó el 31 de diciembre de 2003 con la operación *Año Nuevo* en el Caquetá donde se concentran las fuerzas del Frente 15 de las FARC. *El Universo* (Guayaquil), 26/04/2004.

<sup>2</sup> El Plan Patriota fue anunciado en la prensa colombiana, por el periódico *El Tiempo* de Bogotá el 25 de abril de 2004, poco después del viaje del Presidente Uribe a Estados Unidos en marzo del mismo año.

<sup>3</sup> Desde 1981, la guerra civil colombiana causó el éxodo masivo de más de 3 millones de personas. Para el año 2003, según el informe anual del Comité de los Estados Unidos para los Refugiados el número de desplazados sería de 250.000 a causa de la violencia. El desplazamiento interno y el refugio hacia el exterior, de su población, colocan a Colombia entre los 10 países más problemáticos del mundo. *El Tiempo*, 24/04/2004.

<sup>4</sup> La UNICEF denuncia la violencia ejercida en contra de los niños, secuestrados, víctimas cada año más de las minas antipersonales, o alistados en los grupos armados. Según el periódico *El Clarín* en los últimos

La cultura de la violencia ha invadido la vida cotidiana, se ha instalado como una realidad, trayendo graves consecuencias en todos los sectores de la sociedad. Desde hace algunas décadas, la economía derivada del tráfico de drogas no solamente ha provocado una degradación en las relaciones sociales sino también un cambio profundo en las mentalidades. Luchas armadas, secuestros, extorsiones, asesinatos selectivos por parte de los «sicarios»<sup>5</sup>, matanzas..., esta generalización de la violencia es también el resultado de la política económica neoliberal que ha agudizado las disparidades sociales sin proponer una solución al problema agrario<sup>6</sup>, en un país en el cual la respuesta del Estado a los problemas más cruciales es casi inexistente.

Para la mayor parte de los especialistas de este tema, los antecedentes históricos de la violencia en Colombia se sitúan a inicios de la guerra civil de 1948-58. Es en realidad con el asesinato del carismático líder liberal Jorge Eliécer Gaitán ocurrido el 9 de abril de 1948, cuando comienza el conflicto que opone obreros y campesinos sin tierra, apoyados por los liberales, a los terratenientes y a la clase burguesa conservadora. Iniciado en Bogotá y en otras grandes ciudades, el movimiento insurreccional se desplazará poco a poco hacia las regiones rurales del sur del país. La resistencia campesina se radicaliza en los años 50 frente a la violencia estatal y se organiza en guerrillas de autodefensa<sup>7</sup>. El fenómeno de las luchas armadas en América Latina y en especial en Colombia, como reivindicación de justicia social es en realidad una constante estructural en la historia del subcontinente. Habría que remontar a la época post independentista para tratar de comprender que nada ha sido resuelto desde la emergencia de las nuevas repúblicas en 1830. La rivalidad entre los dos partidos liberal y conservador<sup>8</sup>, que se enfrentaron a lo largo de los siglos XIX y XX permanece vigente. Las desigualdades socioeconómicas y la negativa de la repartición de tierras han originado la creación de los movimientos de guerrilla: FARC, posteriormente el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el M-19. ¿En qué han desembocado estas luchas? ¿Podría decirse que las motivaciones ideológicas son las mismas, ya que la caída del bloque comunista ha privado a la guerrilla de su mayor fuente de financiamiento, a favor del narcotráfico? Las ganancias relacionadas con la economía de la droga sin duda alguna han desvirtuado la lucha de clases hacia la defensa de intereses privados. Frente a esta situación inextricable en la cual, el Estado, los guerrilleros y los paramilitares intervienen sin distinción en la espiral de violencia, cabe preguntarse ¿A cuál de los diferentes protagonistas del conflicto colombiano, le interesa en realidad poner un término a esta bonanza financiera?

---

seis años hubo más de 18.000 secuestros. Seiscientas personas murieron en cautiverio. La industria del secuestro generó entre 1991 y 1999 más de 1.500 millones de dólares. El año pasado se pagaron 245 millones de dólares en rescates. *El Clarín Buenos Aires* – Argentina. Domingo 22 de agosto de 2004.

<sup>5</sup> Asesinos profesionales.

<sup>6</sup> Dos millones y medio de campesinos colombianos fueron despojados de sus tierras y obligados a emigrar a las ciudades. Actualmente, sólo el 0,2% de la población posee cerca de un 50% de las tierras productivas. La fuerte concentración de los latifundios y el desplazamiento forzoso son dos de los fenómenos que incitan al campesino a cultivar la hoja de coca.

<sup>7</sup> G. Rodas Chaves, *El Plan Colombia, análisis de una estrategia neoliberal*, Quito, Ed. Abya-Yala, 2004.

<sup>8</sup> El primero apoya la reivindicación del derecho a la tierra y la justicia social, y el otro defiende los intereses de los grandes terratenientes.

## 2. ¿ES EL PLAN COLOMBIA UNA RESPUESTA ADECUADA?

En esta época de globalización en la cual desaparece la noción de frontera externa o interna, conviene reconsiderar el espacio de seguridad de los Estados afectados directamente por la llegada a su territorio de tráfico ilegales y de organizaciones mafiosas. Frente a las nuevas amenazas transnacionales, sólo una respuesta multi-lateral —de los países productores y receptores (consumidores)— parece necesaria. Por una parte, porque Colombia unilateralmente no podrá resolver el conflicto que se desarrolla en su territorio cuyas implicaciones sobrepasan sus fronteras; y por otra parte, porque los supuestos lazos de la guerrilla con las organizaciones terroristas internacionales representarían una amenaza para la seguridad mundial. En este sentido, el Plan Colombia se presenta como un verdadero llamado a la ayuda internacional al cual —con excepción de los Estados Unidos— los países europeos no han dado la respuesta que hubiera deseado el gobierno colombiano.

El Plan Colombia fue instaurado en 1999 por el Presidente Andrés Pastrana con el propósito de poner un término al conflicto interno que, desde hace ya muchos años, divide al país y opone las guerrillas marxistas (FARC/ELN), al ejército colombiano y a los paramilitares de extrema derecha (AUC)<sup>9</sup>. Ante el aumento de la violencia y de la corrupción fomentada por el narcotráfico, el Estado impotente, tuvo que recurrir a un plan negociado con el propósito de asegurar la paz, la seguridad y el desarrollo del país, dicho plan está financiado en gran parte por los Estados Unidos<sup>10</sup>. Tras el fracaso del proceso de paz en febrero de 2002, y en vista de la actual situación en Colombia, el balance es muy controvertido. A pesar de las estadísticas optimistas de las que hace alarde el gobierno actual sobre el relativo descenso del número de secuestros, homicidios, matanzas y actos terroristas para el año 2004<sup>11</sup> y de la disminución de superficies sembradas con cultivos ilícitos, cabe preguntarse si el Plan Colombia es realmente la respuesta adecuada al fenómeno endémico de la violencia. Haciendo caso omiso de las denuncias en cuanto a violaciones de los derechos humanos de las que ha sido acusado el gobierno colombiano, por el apoyo de parte de ciertos miembros del ejército a las acciones de los paramilitares<sup>12</sup>, el presidente Álvaro Uribe, quien cuenta aún con el apoyo de la mayoría del pueblo colombiano, mantiene su política de seguridad basada en una estrategia militar revitalizada últimamente por el Plan Patriota. Y si los Estados

---

<sup>9</sup> Las FARC-EP: «Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas-Ejército popular», principal fuerza de guerrilla, creada en los años 50 por Manuel Marulanda alias «Tirofijo», contaría con unos 17.000 hombres y el ELN: «Ejército de liberación nacional», de inspiración guevarista, 6.000.

Las AUC «Autodefensas unidas de Colombia», reúnen desde 1998 al conjunto de los grupos paramilitares colombianos bajo el mando de su ex jefe Carlos Castaño; se calculan sus efectivos en unos 13.000 hombres.

<sup>10</sup> El Plan Colombia fue publicado en el sitio Internet de la Presidencia de la República de Colombia. El costo del Plan fue estimado a 7.500 millones de dólares, los Estados Unidos debían aportar una ayuda de 3.500 millones de dólares. Desde el año 2000 hasta la fecha, los Estados Unidos han entregado 2.600 millones.

<sup>11</sup> «Se reducen índices de violencia en todo el país». *El Espectador*, 04/05/04.

<sup>12</sup> «Colombia, el Estado declarado responsable de las masacres». *Courrier international*, (723), 9-15 sept. 2004.

Unidos continúan financiando ese programa —pese a las dudas emitidas por el departamento antinarcóticos norteamericano sobre la eficacia de las medidas adoptadas para América Latina<sup>13</sup>— es porque los intereses que representa son considerables.

Los Estados Unidos han hecho de su lucha contra el tráfico de drogas su prioridad en Colombia, apostando por la estrategia bélica, el financiamiento del Plan Colombia está constituido en un 80% de ayuda militar la cual sirve igualmente para combatir a la guerrilla. En cuanto a la Unión Europea, a pesar de las divergencias de sus Estados miembros sobre la política exterior y de seguridad común<sup>14</sup>, ella se opone a un Plan que juzga demasiado militarista y su ayuda financiera<sup>15</sup> está condicionada al elemental respeto de los derechos humanos y a la ruptura de los supuestos lazos entre las autoridades colombianas y los paramilitares. La respuesta europea es entonces la de dar prioridad a una estrategia de paz, de diálogo y de reformas socioeconómicas, apostando al largo plazo. Uno de los ejemplos concretos de esta ayuda ha sido la creación del «laboratorio de paz en el Magdalena Medio»<sup>16</sup>. Sin embargo, su margen de maniobra está limitado, debido a los reducidos recursos, para un país que no es una prioridad estratégica de la UE.

En cuanto a los latinoamericanos, muchos de entre ellos ven en el Plan Colombia la ingerencia norteamericana en sus asuntos internos y un medio para su poderoso vecino del norte de mantener a bajo costo al país en estado de dependencia. En cambio, el Estado colombiano necesita la ayuda militar y técnica norteamericana en su combate por reforzar sus instituciones democráticas y para hacer frente a la amenaza de «represalias» económicas esgrimidas por Washington contra los países latinoamericanos productores de droga. Ayuda que, según ciertos analistas más críticos, escondería una intención de dominación estratégica de los Estados Unidos para poder justificar su presencia militar en la región, más aún tras la pérdida parcial del canal de Panamá y la retirada de los últimos soldados estadounidenses en 1999. Presencia que garantiza sus intereses económicos entre los cuales está el de la industria petrolera *Oxy-Occidental Petroleum* en la zona del Arauca (Colombia).

---

<sup>13</sup> El responsable de la DEA, John Walters, afirma que los mil millones de dólares invertidos en la lucha antidroga en América Latina se revelaron ineficaces ya que no lograron frenar el flujo de cocaína que circula en las calles de las ciudades estadounidenses. «La vía militar de Uribe no da efectos», 07/08/2004.

<sup>14</sup> Inglaterra y España fueron los dos únicos países de la Unión Europea que proporcionaron una ayuda militar al gobierno colombiano por medio de negociaciones bilaterales llevadas independientemente de la política comunitaria. Ayuda que se inscribe en el marco de la participación a la guerra internacional llevada por los Estados Unidos contra el terrorismo y que se vio reforzada bajo el gobierno del presidente español José María Aznar. Cf. El excelente trabajo de Master en Relaciones Internacionales del alférez Montull : *Las diferentes políticas europeas en Colombia*, publ. de las Escuelas Militares de Saint-Cyr-Coëtquidan, junio de 2004.

<sup>15</sup> La ayuda total de la UE para Colombia asciende a 335,9 millones de euros.

<sup>16</sup> A mediados de los años 90, el CINEP (Centro de Investigación y de Educación Popular) y la Diócesis de Barrancabermeja lanzaron el «Programa de Desarrollo y de Paz del Magdalena Medio» dirigido por el padre Francisco de Roux para hacer frente a la situación de miseria y de violencia. Recibió desde 2002 el apoyo de la Comunidad Europea. Pero la inseguridad que allí reina hoy en día hace de este programa un ejemplo no muy concluyente. *pdpm.org.co*.

En realidad bajo cubierta de una acción combinada antidroga y antiterrorismo, el Plan Colombia formaría parte integrante de la Iniciativa Regional Andina (IRA)<sup>17</sup>, nueva estrategia geopolítica de seguridad más amplia instalada por Washington bajo la forma de un programa de asistencia militar y económica. En los discursos más contestatarios contra el Plan Colombia por parte de numerosas ONG de defensa de los derechos humanos, de las organizaciones civiles, sociales o políticas<sup>18</sup>, se adivina el rechazo a la influencia norteamericana sobre la economía regional consistente en la conquista de los mercados del sur que ofrecen la perspectiva de la instauración del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), el control hegemónico de los recursos energéticos y de las riquezas vitales del planeta: fuentes de agua dulce, oxígeno, biodiversidad...

### 3. RIESGO DE REGIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO COLOMBIANO: ¿EL ECUADOR UN ENVITE DECISIVO?

El conflicto interno en Colombia, por sus repercusiones extraterritoriales debido a la aplicación del Plan Patriota ¿traerá como consecuencia la desestabilización de la subregión andina y sobretodo de los países limítrofes como Venezuela y el Ecuador?

Con la elección del presidente colombiano Álvaro Uribe en junio de 2002, la política de represión del narcotráfico se ha orientado hacia la lucha antiterrorista con la instauración desde julio de 2003 del *Estado de Conmoción Interior*<sup>19</sup>. La estrategia de seguridad del presidente Uribe se focaliza en dos objetivos: la desmilitarización de los grupos armados paramilitares<sup>20</sup> —proceso que comenzó en noviembre de 2003— y la recuperación de los territorios ocupados sobre todo por las guerrillas de las FARC. Aunque poniendo de relieve el aspecto social de su política, el gobierno da prioridad en la práctica a lo militar. Una serie de medidas se han

---

<sup>17</sup> «Para ayudar a los países andinos, la administración Bush pidió 882 millones de dólares en el año fiscal 2002 para el financiamiento de asuntos internacionales con el fin de establecer instituciones democráticas y ayudar al desarrollo, al igual que para programas contra las drogas ilícitas en los siete países incluidos en la iniciativa: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Más de la mitad de esa ayuda es para los vecinos de Colombia, mientras que el resto es para apoyar los programas vigentes en Colombia. También, la ayuda está dividida en partes casi iguales entre la promoción de la democracia y la ayuda a la seguridad y la aplicación de la ley.» *Departamento de Estado de Estados Unidos*. Programas de Información Internacional.

<sup>18</sup> Respecto a este tema, leer las declaraciones del *Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador*, en los numerosos sitios Internet como: [www.derechos.org/nizkor](http://www.derechos.org/nizkor), [llacta.org](http://llacta.org), [geocities.com](http://geocities.com), [ciponline.org](http://ciponline.org), [derechos.org](http://derechos.org), [tlahui.com](http://tlahui.com), etc.

<sup>19</sup> La nueva legislación antiterrorista, votada por el Parlamento colombiano, confirió a las Fuerzas Armadas poderes de policía judicial en las zonas que escapan al control del Estado.

<sup>20</sup> El 25 de noviembre de 2003, 855 paramilitares de extrema derecha depositaron las armas para poder reintegrarse a la vida civil, durante una ceremonia oficial presidida por el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. El acuerdo firmado entre las AUC y el gobierno en mayo de 2004, prevé una zona llamada de *Ubicación* de 368km<sup>2</sup>, en la jurisdicción de Tierralta; Santa Fe de Ralito será la sede de las negociaciones bajo el auspicio de la OEA y de la Iglesia católica, encargadas de verificar el buen funcionamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz. El presidente Uribe espera obtener de aquí a 2006 la restitución de las armas de unos 20.000 combatientes de esas organizaciones. [www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co)

puesto en marcha —tales como el «Programa de los soldados campesinos<sup>21</sup>»— y también el afianzamiento de la presencia de consejeros técnicos civiles y militares norteamericanos<sup>22</sup> así como la adquisición de material de guerra destinado al Plan Patriota. La guerra que se desarrolla actualmente en la frontera colombiana (departamentos del Guaviare, Meta, Caquetá, Nariño y Putumayo) y ecuatoriana (región de Sucumbíos y del río San Miguel) precisa de un refuerzo militar de lado y lado, cuyo objetivo es el de acorralar a la guerrilla, la cual podría entrar en conflicto con las fuerzas armadas del Ecuador. ¿Cuál será entonces el grado de implicación militar del Ecuador, si se conoce que está prevista una movilización de entre 15.000 a 17.000 hombres en la frontera norte<sup>23</sup>? El Plan Patriota divide a todos los ecuatorianos por la falta de transparencia de las fuentes oficiales en cuanto a su financiamiento y por sus objetivos mal definidos<sup>24</sup>. En el seno de la opinión pública y de los grupos parlamentarios y políticos ecuatorianos se plantean interrogantes en cuanto al tipo de cooperación diplomática, militar, policial o humanitaria existente entre Colombia y el Ecuador y sobre el riesgo para este último de encontrarse envuelto de hecho en el conflicto. Las dudas conciernen sobre todo al papel que desempeñará la base de Manta en caso de escalada bélica en la frontera. «Puesto de operaciones avanzado» (FOL) en la costa del Pacífico, esta base fue cedida a los Estados Unidos para las operaciones antidroga del Comando Sur (Southcom)<sup>25</sup>. El aumento de la ayuda militar prestada por los Estados Unidos, no deja de inquietar a las organizaciones civiles del país. Algunos periodistas hablan incluso de proyectos de ocupación militar norteamericana de las islas Galápagos.

El Ecuador por su situación geográfica, sus reservas petrolíferas en la Amazonía y su base militar estratégica que permite el control de la parte sur del subcontinente,

---

<sup>21</sup> 5.000 soldados campesinos han sido reclutados en el 2004 —en los rangos de los AUC desmovilizados— con el fin de reforzar el plan de seguridad interno.

<sup>22</sup> El gobierno de George W. Bush ha solicitado al Congreso el aumento de 400 a 800 del número de consejeros militares y de 400 a 600 el de contratistas civiles en Colombia; petición que fue aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en mayo de 2004. La DynCorp ha sido una de las primeras compañías en proponer a Colombia sus servicios de consejos logísticos y técnicos para adiestrar a los pilotos colombianos en el manejo de aviones norteamericanos. *El Universo* (Guayaquil), 26/03/04.

<sup>23</sup> El Ecuador ha movilizado entre 7.000 y 10.000 soldados en esta frontera. En el momento más fuerte del enfrentamiento militar con el Perú (Alto Cenepa en febrero de 1995), las fuerzas desplegadas en la frontera sur fueron de 6.000 hombres.

<sup>24</sup> La embajadora de los Estados Unidos en Bogotá contradujo públicamente las declaraciones de la embajadora de Colombia en el Ecuador, María Paulina Espinosa, al confirmar que las fuerzas militares colombianas que participan en el Plan Patriota reciben entrenamiento, asistencia militar y armamento cuyo costo está incluido en la suma asignada para el año 2004 al Plan Colombia, es decir 700 millones de dólares. *El Universo*, 30/04/04, 01/05/04 y 07/04/04.

<sup>25</sup> El Comando Sur cuya sede está en Miami es uno de los cinco Comandos unificados que operan en el mundo. Su área de responsabilidad incluye a 19 naciones entre las cuales están los países de América Latina y del Caribe (exceptuados México y la Guyana francesa). Coordina los planes militares contra el narcoterrorismo en la región, así como misiones de segundo orden (ayuda humanitaria, operaciones de rescate en caso de catástrofe natural...). Un acuerdo firmado en septiembre de 2003 entre el Ecuador y los Estados Unidos permite la construcción de tres centros logísticos humanitarios para el Comando Sur para hacer frente a las consecuencias dramáticas del fenómeno del Niño. Uno de ellos, basado en Sucumbíos podría servir como centro de ayuda y atención médica para las víctimas de la guerra colombiana que atraviesen la frontera.

representa desde luego un envite importante en la política regional de seguridad norteamericana. Tanto más cuanto que las nuevas cartas del equilibrio geopolítico internacional incitan a Washington a conservar a sus aliados tradicionales en los países de América Latina, en momentos en que esta zona conoce una recrudescencia de movimientos contestatarios indígenas y un nuevo despertar del sentimiento antiyanqui, que amenazan su poderío. A falta de lograr la concretización del ALCA, se han lanzado negociaciones bilaterales entre Colombia, el Ecuador y el Perú con los Estados Unidos para establecer tratados de libre comercio. El Plan Patriota por su parte, representa igualmente para esos países una ayuda material y financiera nada despreciable que permitirá reestructurar y modernizar sus ejércitos. Y si la población ecuatoriana parece opuesta a interferir en un conflicto externo, el presidente Uribe puede, por el contrario, contar con el apoyo político del actual gobierno ecuatoriano. Alianza valiosa que no deja de subrayar el general James T. Hill, jefe del Southcom, en cada una de sus ya numerosas visitas efectuadas en el Ecuador desde noviembre del 2002<sup>26</sup>. El Ecuador se declaró oficialmente «aliado» de los Estados Unidos y de la comunidad internacional en su empeño por luchar contra el narcoterrorismo<sup>27</sup> y reclama para ello una compensación. Es por otra parte, la cooperación operativa entre los servicios de inteligencia de los Estados Unidos (DEA), las fuerzas de policía colombianas (DAS) y ecuatorianas (UIES) lo que permitió la detención en Quito, en enero de 2004, de Simón Trinidad, un alto responsable de las FARC<sup>28</sup>.

Frente a la militarización progresiva de la región andino-amazónica y a la determinación de los dos gobiernos para cooperar en la lucha contra el narcoterrorismo, cabe preocuparse de las consecuencias sociopolíticas y económicas en el Ecuador.

#### **4. REPERCUSIONES DEL CONFLICTO ARMADO SOBRE LA POBLACIÓN FRONTERIZA**

El conflicto colombiano tuvo como consecuencia directa, el desplazamiento forzado de las personas que atraviesan la frontera diariamente, en grupos reducidos, para entrar al Ecuador e instalarse en las zonas tradicionalmente afectadas por la pobreza, la marginación y la violencia generalizada. La guerra que afecta actualmente a la frontera norte del Ecuador profundiza cada vez más la crisis sanitaria y humanitaria que soportan las poblaciones campesinas e indígenas de las localidades situadas a orillas de los ríos San Miguel y Putumayo. El desplazamiento de población, ocasionado por las fumigaciones destinadas a la erradicación de los cultivos ilícitos y por la intensificación de la guerra civil (matanzas, represalias sobre las personas sospechosas de pertenecer a uno u otro bando) podría aumentar considerablemente. En la sola región

---

<sup>26</sup> *El Comercio*, 07/10/04.

<sup>27</sup> Ver para esto la Declaración conjunta de los señores presidentes de las Repúblicas de Colombia y del Ecuador, del 23 de agosto 2003.

<sup>28</sup> Según un comunicado de las FARC, S. Trinidad se encontraba en el Ecuador con el fin de negociar la liberación de los rehenes y preparaba un posible encuentro con el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan.

del Caquetá en el suroeste colombiano durante los primeros meses del año 2004, 1.500 campesinos han sido desplazados como consecuencia del Plan Patriota durante la ofensiva militar contra el «Bloque Sur» de las FARC, la mayor parte se refugiaron en el Ecuador, 400 llegaron a Sucumbíos<sup>29</sup>. En el año 2004, unos 80.000 colombianos ingresaron al Ecuador, de los cuales más de 30.000 se quedaron. Se calcula en 300.000 el número de colombianos que ingresaron al Ecuador desde el principio de la guerra emprendida contra las FARC en el sur de Colombia<sup>30</sup>.

Proyectos como el de *Asistencia Humanitaria Frontera Norte* han sido puestos en marcha por la Cruz Roja en las provincias del norte: Sucumbíos, Esmeraldas, Carchi, Imbabura y en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados<sup>31</sup>. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) abrió un centro de asistencia capaz de recibir a 1.000 personas refugiadas en Lago Agrio (la ciudad más importante de la región noroeste del país), mientras que el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) lleva a cabo un programa social para las familias colombianas, sobre todo en el ámbito escolar, aunque dispone de un presupuesto muy reducido para hacer frente a las necesidades cada vez más grandes<sup>32</sup>. A pesar de las medidas de carácter educativo, sanitario y cultural adoptadas, así como de la ayuda proveniente del BID (Banco Interamericano para el Desarrollo) y de la Unión Europea, las ONG y las asociaciones de Derechos Humanos continúan criticando la escasez de recursos de los gobiernos colombiano y ecuatoriano para instalar estructuras de urgencia. Es indispensable una ayuda eficaz al desarrollo económico de las regiones más afectadas de la frontera norte, donde la inseguridad y la pobreza van en aumento. Muy a menudo son los clérigos de los pueblos fronterizos quienes se ocupan de los desplazados. Además, esos refugiados constituyen una comunidad frágil en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, civiles y políticos, y es el objeto de una verdadera estigmatización: colombiano, es sinónimo de narcotraficante, paramilitar o guerrillero<sup>33</sup>.

La reciente instauración de una especie de visado para los colombianos que ingresan en el Ecuador, certificado judicial y de policía otorgado por el DAS<sup>34</sup>, es vista por las autoridades locales como una traba al proceso de integración que afectaría al turismo, y a las relaciones comerciales y familiares de los habitantes de los dos lados de la frontera, que han compartido desde siempre tradiciones, costumbres y comercio. Según el alcalde de Tulcán, una de las ciudades más dinámicas por su intercambio comercial con Colombia, las decisiones tomadas por las autoridades

<sup>29</sup> Cf. *El Comercio* (Quito) y *El Universo* (Guayaquil), 7-9/05/04.

<sup>30</sup> Declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Patricio Zuquilanda. Del año 2000 al 2003, casi medio millón de colombianos ingresados no figuran en los registros de salida. Por eso, organismos sociales y de derechos humanos calculan, con base en estadísticas oficiales, que por lo menos 250.000 colombianos estarían viviendo en el Ecuador sin documentos. *El Tiempo*, 06/10/04.

<sup>31</sup> «Asistencia humanitaria en la frontera colombiana». *El Universo*, 09/05/04.

<sup>32</sup> La provincia sólo cuenta con un presupuesto mensual de entre 600 y 1.000 dólares cuando en realidad necesitaría de 2.000 suplementarios. *El Universo*, 09/05/04.

<sup>33</sup> Los inmigrantes colombianos sin papeles —calculados en más o menos 250.000 personas— son víctimas de la violencia, del abuso de autoridad y del chantaje ejercido algunas veces por miembros de la policía, según las denuncias de unas veinte organizaciones sociales y de derechos humanos. *El Tiempo*, 07/10/04.

<sup>34</sup> *Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia*.

ecuatorianas son el fruto de una «visión centralista, que ignora la realidad de la frontera». Mientras que para el presidente de la Cámara de Turismo, esta medida no será suficiente para controlar todas las travesías ilegales entre la provincia del Carchi (Ecuador) y el departamento de Nariño (Colombia) y traerá como consecuencia el agravamiento de la recesión económica de la provincia<sup>35</sup>. Por último la obtención de un visado laboral ha provocado las más duras críticas por parte de esta población, ya que al encontrarse completamente desposeída económicamente, no puede hacer frente a su costo y a los engorrosos trámites administrativos.

El segundo riesgo, directamente relacionado con el Plan Patriota, es el de un desplazamiento del fenómeno de la violencia hacia el Ecuador. Los éxitos obtenidos por los colombianos en la guerra contra la droga, obligan a los « narcoterroristas » —según el término empleado por el general James T. Hill— a cruzar esas fronteras «permeables» y a encontrar zonas más seguras y poco asequibles para poder llevar a cabo sus operaciones. El Ecuador parecería ser un lugar de apoyo logístico para los guerrilleros, adonde pueden ingresar libremente, abastecerse de armamento y alimentos; y hasta recibir asistencia médica<sup>36</sup>. Los combates que libran —sobre todo desde 2004— el Ejército colombiano y el frente 48 de las FARC, cerca de las orillas de los ríos San Miguel y Putumayo, han provocado el aumento de la instalación de bases y campamentos clandestinos de la guerrilla en suelo ecuatoriano. Dan testimonio diariamente de ello, las patrullas de la Brigada de selva n.º 19 Napo que descubren habitualmente, escondidas en la selva, infraestructuras pertenecientes a las fuerzas irregulares, con laboratorios equipados para el refinamiento de la coca, habitaciones, consultorios médicos, campos de entrenamiento<sup>37</sup>... Es un hecho que el ingreso al país de esos grupos armados ocasiona en la población que vive cerca de los afluentes de la frontera, una sensación de miedo y de inseguridad; lo cual explica el aumento de la tenencia ilegal de armas entre los campesinos ecuatorianos<sup>38</sup>. Sin embargo, el hermetismo oficial y el uso cotidiano de los rumores como fuente de información, conducen a la confusión permanente en cuanto a los actores de la violencia (paramilitares, guerrilleros o simples delincuentes que sacan partido de la situación) y a la deformación de los hechos comunicados por los periodistas, provocando una sensación más grande de inseguridad y de caos<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> «El pasado judicial es obligatorio desde hoy». *El Comercio*, 01/05/04.

<sup>36</sup> El Departamento de Estado Americano habría declarado que la frontera tenía la reputación de ser « un largo corredor estratégico para armas, municiones y explosivos destinados a los grupos terroristas » y había además criticado el laxismo de la policía y del ejército ecuatorianos frente a la infiltración de estos últimos. Según las encuestas del International Crisis Group (ICG), 40% de la cocaína que produce Colombia saldría desde el Ecuador y 50% de las armas y explosivos utilizados por los grupos irregulares colombianos entran por esta vía. «Análisis: el eslabón más débil». *El Tiempo.com-especial fronteras*, 09/08/2003.

<sup>37</sup> «Sucumbió: 600 hombres actuaron en el operativo militar», «El Ejército halló bases irregulares». *El Comercio*, 11/07/04, 12/09/2004.

<sup>38</sup> «En los Ríos cada mes se incautan 20 armas ilegales». *El Comercio*, 11/07/04.

<sup>39</sup> Según las municipalidades de las comunas fronterizas, la instalación de campos de entrenamiento provisionarios, por parte de la guerrilla en suelo ecuatoriano, representan una gran atracción para los jóvenes que viven a orillas de los ríos San Miguel y Putumayo. La crisis educativa y las pocas alternativas propuestas a la juventud explican, posiblemente, el entusiasmo de los jóvenes para alistarse en las filas de los ejércitos rebeldes, por intermedio de la frecuencia radiofónica «La Voz de la Resistencia».

Las frágiles medidas de seguridad en la frontera y los pocos controles de policía en las oficinas de inmigración, permiten a los grupos armados colombianos encontrar refugio en el Ecuador. Además, el bloqueo del territorio colombiano, consecutivo a la aplicación del Plan Colombia y del Plan Patriota, ha dado como resultado la transformación del Ecuador en lugar de tránsito para la droga, por su cercanía con las zonas de narcotráfico colombiano y la consecuente llegada de bandas criminales. Se teme entonces, la aparición de carteles en las ciudades fronterizas de Esmeraldas y Sucumbíos, que luego podrían extenderse al resto del país. Se calcula que entre un 30 y un 40% de la cocaína producida en Colombia sale de los puertos ecuatorianos<sup>40</sup>. La «Operación Bruselas» llevada a cabo por la policía antinarcóticos ha desmantelado una red que operaba en las provincias de Imbabura, Guayas y Pichincha, y que exportaba cocaína —proveniente de Colombia y transformada en laboratorios ecuatorianos— desde el aeropuerto de Quito con destino a Bélgica<sup>41</sup>. Según las fuentes policiales, el Ecuador sería uno de los polos de *narcolavado*, el dinero se invertiría básicamente en bienes raíces y en tiendas de lujo.

Por último, la Policía Judicial confirma el aumento de grupos delictivos y de crímenes « importados » en la zona norte con la multiplicación del *sicariato*, secuestros, extorsiones, *coyotismo*<sup>42</sup>, tráfico de droga...<sup>43</sup>. La Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía Ecuatoriana (Unase) revela que si en 2003 los plagios con extorsión habían sido planificados y dirigidos por colombianos con la complicidad y la participación de delincuentes comunes ecuatorianos, muy rápidamente estos últimos han suplantado a los primeros, pero su inexperiencia trae consecuencias casi siempre fatales para las víctimas<sup>44</sup>.

La recrudescencia de la delincuencia y del crimen organizado consecutivo a la aplicación del Plan Patriota han revelado las fallas del sistema institucional y judicial ecuatoriano: la ausencia de leyes para sancionar los delitos transnacionales y la falta de recursos otorgados a la Policía para efectuar sus inspecciones. La Dirección Nacional Antinarcóticos del Ecuador ha revelado los puntos débiles en materia de control y de seguridad del territorio: el espacio aéreo, los puertos marítimos, la producción y el tránsito de precursores químicos que sirven para la elaboración de drogas duras y por último la ausencia de legislación para el control de lavado de dinero<sup>45</sup>. La cooperación policial entre los Estados es aún incipiente, no hay una

---

<sup>40</sup> Entrevista con M. J. L. Bodin, primer consejero de la Embajada de Francia en Quito, julio de 2004.

<sup>41</sup> El «padrino» de la poderosa red, el otavaleño Oscar Caranqui, no pudo ser detenido durante la operación, pero sus numerosos bienes y sus 31 lujosas propiedades han sido incautados. *El Comercio*, 29/06/ y 01/07/04.

<sup>42</sup> *Coyotismo*: dicese de las personas inescrupulosas que se lucran con el afán migratorio de cierta categoría de población, mediante el contrabando ilegal de la misma.

<sup>43</sup> «El secuestro en aumento». *El Comercio*, 05/07/2004.

<sup>44</sup> O. Paredes, experto en la lucha contra los secuestros, explica que los delincuentes comunes son mucho más violentos y que es más fácil negociar con profesionales, quienes generalmente tratan mejor a sus víctimas. La Policía denuncia también que los ecuatorianos atraviesan muy a menudo la frontera con el propósito de negociar con los paramilitares o con la guerrilla la venta de personas secuestradas. «El plagio, un negocio importado de Colombia». *El Universo*, 09/05/04.

<sup>45</sup> Según la ONU, cinco toneladas de cocaína salen cada año de los puertos ecuatorianos; el reducido personal policial limita las investigaciones necesarias. «El control antidrogas». *El comercio*, 04/07/04.

verdadera política gubernamental en este ámbito, lamenta el coronel Mera, jefe de la Unase, lo cual obliga a la Policía Nacional a trabajar dentro de los límites de su jurisdicción<sup>46</sup>. Además, el empleo de servicios privados de seguridad, fenómeno creciente en el Ecuador, es preocupante ya que estas compañías escapan a cualquier tipo de control estatal y que su único interés es vender la percepción de inseguridad a la sociedad en general, sin ningún tipo de ética y ni deontología.

Hay un proyecto de reforma, cuyo objetivo es el de instaurar una policía profesional de concepción más técnica y científica para combatir el crimen. Frente a la mutación de los medios delincuenciales y de los sistemas de robo y de violencia, es imperativa la modernización de los equipos (sistema electrónico de vigilancia) así como la capacitación permanente de los uniformados; la meta es la de inculcar una «cultura policial» a los agentes quienes se enfrentan a los más grandes peligros y formarlos en el conocimiento del terreno y el contacto directo con la población<sup>47</sup>. Un proyecto de creación de una «Policía Comunitaria» (Unidades de Policía Comunitaria, UPC) está destinado a estrechar los lazos entre las fuerzas de seguridad y la población con la finalidad de restablecer la cohesión nacional. Alberto Luna Tobar, ex arzobispo de Cuenca, explica que el Ecuador enfrenta una grave crisis de valores en la cual la policía, que no está exenta de corrupción, debe ganarse de nuevo la confianza de las personas. Según éste, el Ministerio del Interior tendrá entonces que lanzar una reforma del personal de la Policía cuya misión fundamental debe ser: la defensa del ciudadano. Los jueces, por otra parte, tienen el deber de aplicar las leyes imponiendo la justicia por encima de toda forma de clientelismo. Numerosos juristas aseguran del mismo modo que el ritmo de la criminalidad y las nuevas formas de delitos transnacionales hacen necesaria la reforma del Código Penal<sup>48</sup>.

Otro objetivo es el de reforzar los lazos y las alianzas interpoliciales de carácter transnacional. Pero si aún se nota cierta reticencia a un trabajo de cooperación con Europa en los asuntos de seguridad, existe ya una verdadera toma de conciencia de los países andinos en cuanto a su aspecto multidimensional y a la necesidad de una cooperación subregional en este campo<sup>49</sup>. Otro tema de actualidad es la creación en el seno de la OEA de una Política de Seguridad Común Andina (PSCA) que incluye proyectos de instalación de Centros Binacionales de Protección de Fronteras (CEBAF)<sup>50</sup>.

---

<sup>46</sup> *El Universo*, 09/05/04.

<sup>47</sup> Dentro del «Plan de Modernización y de Transformación Integral de la Policía Nacional», el jefe de Estado Mayor de la Policía ecuatoriana, Marco Cuvero, preconiza la ampliación de los acuerdos con las universidades para la formación de las policías.

<sup>48</sup> *El Comercio*, 04/07/04.

<sup>49</sup> Tentativas de cooperación para la resolución de los conflictos y de las crisis de la subregión han sido ya puestas en marcha, durante la guerra Ecuador-Perú (1995).

<sup>50</sup> O. Jarrín, «Plan Colombia, dinámica y perspectiva en la seguridad subregional», Coloquio: *Francia-América Latina y el Caribe – la cooperación en el ámbito europeo de los asuntos de justicia y de seguridad*. París, 4 y 5 de octubre del 2004.

## 5. A LA HORA DE LOS RESULTADOS

El Plan Colombia, única respuesta aportada por los Estados Unidos al problema de la droga, es sin lugar a dudas insuficiente y desacertado. En lo que respecta a la guerrilla, estos movimientos no dan señales de debilidad, se habla más bien de repliegue estratégico; las negociaciones sobre el intercambio humanitario de los rehenes con el gobierno están estancadas<sup>51</sup>. Muchas personas han criticado los efectos perversos de una política colombiana que aplica la ley del embudo, demasiado complaciente con los paramilitares en el proceso de desmovilización (negociaciones sobre la reinserción en la vida civil, amnistía para los crímenes cometidos<sup>52</sup>...) omitiendo las recomendaciones de la ONU relativas a los derechos humanos (sobre la instalación de comisiones de investigación de los presuntos lazos con las fuerzas de seguridad). Amnistía Internacional reprocha al gobierno de Álvaro Uribe haber cometido, gracias al empleo de recursos oficiales y legales como la legislación «antirterrorista», numerosas infracciones contra los derechos humanos al estigmatizar a la población civil sospechosa de simpatizar con la guerrilla. El Plan Patriota podría agravar esta situación y dividir aún más a la sociedad civil. Pero hay algo más preocupante hoy en día, la opinión pública y la clase política en Colombia dan la señal de alarma sobre un nuevo fenómeno: la «paramilitarización» de la sociedad. La desmovilización de las milicias de extrema derecha les ha permitido buscar antes que nada una legitimidad. Las AUC se encuentran presentes en 382 municipalidades, pasando de esta manera del control militar al control político y social del país, infiltrando a todas las esferas de la sociedad e incluso a nivel de las instituciones estatales<sup>53</sup>.

En cuanto al balance de la lucha contra el tráfico de droga, los resultados no son lo que se esperaba. Las fumigaciones masivas efectuadas en la región amazónica fronteriza con Colombia no han solucionado para nada la situación socioeconómica de los campesinos pobres para quienes la cultura de las hojas de coca representa una fuente de ingresos muy superior a la de los cultivos tradicionales. Por otro lado, las fumigaciones con glifosatos, producto extremadamente tóxico, representan una amenaza real para el medio ambiente de las poblaciones<sup>54</sup>. Los campesinos e indí-

---

<sup>51</sup> En septiembre de 2004, las FARC propusieron la creación de una «zona de seguridad» para proceder al canje de prisioneros en el departamento del Caquetá, corazón de la región en la cual se aplica el Plan Patriota. Los analistas ven en ello un instrumento de presión hacia el gobierno con el objeto de recuperar un espacio político.

<sup>52</sup> Entre enero de 1994 y diciembre de 2003, la *Defensoría del Pueblo* así como el *Observatorio de los Derechos Humanos* de la vicepresidencia atribuyen a los paramilitares la mayoría de las 1.969 matanzas registradas en el país y de los 10.174 asesinatos. *El Tiempo*, Bogotá, 26/09/04.

<sup>53</sup> Cf. Informe sobre la «paramilitarización» de Colombia publicado en *El Tiempo*, 26/09/04.

<sup>54</sup> Las fumigaciones previstas en el Plan Colombia han destruido el equilibrio del ecosistema y de la biodiversidad, contaminando la vegetación y las aguas de la región amazónica en la frontera norte. Ellas no solamente han afectado a los cultivos básicos provocando una reducción de la producción agrícola sino que también han tenido repercusiones graves en la salud, provocando enfermedades de la piel, abortos o cáncer. Los glifosatos habrían sido la causa de daños genéticos en las mujeres embarazadas con casos de malformaciones de los recién nacidos. Cf. El sitio del *Observatorio Internacional por la Paz* (OIPAZ), [serpaj@ecuanex.net.ec](mailto:serpaj@ecuanex.net.ec)

genas ecuatorianos han reclamado indemnizaciones a la compañía DynCorp por los daños ocasionados a los suelos, a las personas y a los animales; también han pedido el establecimiento de una franja de 10 Km. desde la frontera binacional hacia el interior del territorio colombiano al abrigo de las fumigaciones. Al no poder conseguir aquello, el gobierno ecuatoriano que ha dado su aval a Colombia para la continuación de su plan antidroga en los límites fronterizos, pide sin embargo que se fumigue a baja altura<sup>55</sup>.

Si los cultivos ilícitos han disminuido en las regiones en las que se los cultivaba tradicionalmente bajo el control de la guerrilla, al parecer estos se han ido desplazando hacia zonas más alejadas y menos controladas en Bolivia y Perú. Y a pesar de las cifras oficiales que dan fe de una baja constante de las superficies cultivadas (cerca del 40% desde 2002), el rendimiento estaría aumentando en un área de cultivo más reducida<sup>56</sup>. Desde el 2001, el cerco de vigilancia impuesto en el Caribe ha traído como consecuencia la de sortear el dispositivo antinarcóticos norteamericano por parte de los carteles de la droga que buscan nuevas zonas de tránsito y nuevos mercados, ése es el caso ecuatoriano. La cooperación policial multilateral —acuerdo de cooperación entre Europol y el gobierno colombiano para el intercambio de informaciones de tipo estratégico o técnico además de la PSCA— tal vez sea la respuesta a las nuevas amenazas engendradas por los tráfico ilícitos o las organizaciones mafiosas en los países en los que la lógica de seguridad estaría orientada quizás más fácilmente hacia lo policial que hacia lo militar<sup>57</sup>. Aunque en el Ecuador el problema económico es prioritario, la lucha contra la inseguridad, se ha convertido en el nuevo tema de campaña de los candidatos a las elecciones municipales.

Empero, si el Ecuador no puede ignorar los problemas engendrados por los delitos transnacionales ¿debería entonces implicarse más allá de la defensa de su territorio y de la seguridad en la zona norte? La opinión pública ecuatoriana en su gran mayoría se inclina a favor de la no ingerencia en ese conflicto, al afirmar su voluntad de preservar en el ámbito de su política internacional el principio de la soberanía nacional. Más aún, porque las relaciones diplomáticas entre Colombia y el Ecuador —cuyos lazos culturales e históricos son tradicionalmente sólidos— se han visto sacudidas a causa del problema suscitado en junio de 2003 por la supuesta venta de armamento por parte de ciertos militares ecuatorianos a la guerrilla de las FARC<sup>58</sup>. La clase política ecuatoriana en su conjunto es por tanto favorable a una colaboración entre los dos países, para reforzar la frontera común, con el objeto de luchar contra el tráfico de drogas y de armamento, así como para la regularización de las admisiones al Ecuador por medio de la imposición de nuevas medidas migratorias; pero por el momento, el asunto es de no enfrentarse a la guerrilla colombiana<sup>59</sup>.

<sup>55</sup> *El Comercio*, 04/08/04.

<sup>56</sup> Cf. Declaración de L.A. Moreno, embajador de Colombia en Washington. *El País* (Cali), 03/04/04.

<sup>57</sup> Entrevista con el comandante José Montull, jefe de escuadrón de la gendarmería francesa quien trabaja en la subdirección de cooperación internacional, sector de las Américas, París julio de 2004.

<sup>58</sup> «Militares de Ecuador negociaron armas con las FARC», *esmas.com/noticierostelevisa/internacionales*, 01/2004.

<sup>59</sup> Cf. las declaraciones sobre ese tema de N. Pacari, ex ministra de Relaciones Exteriores, y del señor Gándara, ex embajador ecuatoriano. *El Comercio*, Quito, 08/04/2004. Una parte del Ejército ecuatoriano no

Por último, si bien es cierto que hoy en día no se puede limitar el conflicto colombiano a las simples reivindicaciones sociales originales, debido a los ingresos obtenidos de la « narcoeconomía », ¿podría realmente vislumbrarse la erradicación del problema de la violencia sin justicia social ni distribución de la riqueza? Mientras el campesino continúe obteniendo una ganancia cuatro veces superior al salario normal en las plantaciones de coca colombianas<sup>60</sup> y que la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción no sean una prioridad y mientras que los países ricos no trabajen en favor de un comercio equitativo, el tráfico de drogas está aún muy lejos de su desaparición. En todo caso, es una necesidad urgente, el establecimiento de una estrategia de desarrollo sostenible en las zonas fronterizas. Propositiones sobre las que trabajan el gobierno ecuatoriano y numerosos actores del mundo político y de las organizaciones indígenas, quienes reclaman un espacio de participación más amplio en las tomas de decisión y en la vida económica y social del país. Ese es el mensaje que han querido enviar los millares de indígenas ecuatorianos con motivo del Foro de las Américas celebrado en Quito durante el mes de agosto último, así como los de Colombia quienes protagonizaron la «gran marcha» hacia Cali en septiembre pasado. Ellos que han pagado un enorme tributo a raíz del conflicto armado que tantos estragos ha causado en sus tierras, exigen ahora el respeto de sus derechos, denuncian las artimañas de los protagonistas armados y las injusticias de la política económica neoliberal<sup>61</sup>.

---

oculta su apego a una solución pacífica y negociada con la guerrilla, con la mediación de la Unión Europea, dado que «esta movilización conducida artificialmente no está arraigada en un sentimiento de defensa de la Patria, sino que está condicionada por un conflicto de intereses supranacional». Cf. Declaraciones del general René Vargas Pazzos y del coronel Jorge Brito, miembros del *Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia*.

<sup>60</sup> Cabe señalar que el tráfico de droga permite la subsistencia de toda una categoría de la población: miles de campesinos locales han visto sus salarios multiplicados por cuatro en esta región en la cual se produce casi la mitad de la cocaína que se vende en los Estados Unidos. La ciudad de Nueva Loja, se ha favorecido durante años con la presencia de la guerrilla y de los cultivadores de coca a través de la venta de alimentos, bebidas, atención médica y productos químicos para la fabricación de la cocaína. «Antes de que comience su aplicación, el Plan Colombia consigue que los efectos de la guerra lleguen a Ecuador», sitio del Equipo Nizkor, artículo traducido del *Miami Herald* de Juan O. Tamayo, 18/11/2000.

<sup>61</sup> La dolarización de la economía ecuatoriana en vigor desde 1999 ha contribuido a la pauperización de las clases más desfavorecidas, provocando al mismo tiempo un fuerte éxodo rural. La delincuencia juvenil en las grandes ciudades (fenómeno de las *pandillas*) consecuencia de la desintegración familiar se ha agravado recientemente a causa de la masiva emigración hacia España.

